

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI**  
**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

REF. ORDINARIO DE **ALBERTO ANTONIO ARRAZOLA MERLANO**  
**VS. PORVENIR S.A. Y COLPENSIONES**  
RADICACIÓN: **760013105 012 2019 00223 01**

**AUTO NUMERO 916**

Cali, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Mediante memorial allegado a través de correo electrónico a la Secretaria de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, el 6 de octubre de 2020, el apoderado judicial de PORVENIR S.A. solicitó la adición de la sentencia numero 197 C-19 del 25 de septiembre de 2020, pues consideró que la Sala al proferir la decisión omitió pronunciarse frente a los siguientes aspectos:

1. *“Cuál es la prueba idónea para demostrar que mi representada suministró la información completa y oportuna, como quiera que el fallador de segundo grado le restó valor probatorio al formulario de vinculación de la demandante, pese a que se trata de un documento público que se presume auténtico en los términos de los artículos 243 y 244 del CGP y 54 del CPT y SS, que fue aprobado por la Superintendencia Financiera, el cual no fue tachado ni desconocido en los términos de los artículos 270 y 272 del referido CGP.*
2. *Cuál es fundamento legal para declarar la ineficacia del traslado de régimen, si conforme lo ha enseñado la Corte Constitucional de antaño, “La ineficacia en sentido estricto se presenta en aquellos casos en los cuales la ley, por razones de diferente naturaleza, ha previsto que el acto no debe producir efectos de ninguna naturaleza sin que sea necesario la existencia de una declaración judicial en ese sentido”.*
3. *Si la disposición en que se soporta la decisión es el artículo 1746 del CC, indicar qué supuesto fáctico de los señalados en los artículos 1740 a 1745 del mismo ordenamiento, se acreditó en el proceso, - esto con fundamento en el principio de la inescindibilidad de las normas-, en la medida que los referidos artículos establecen cuáles son las condiciones para la declaratoria de la nulidad de un acto o contrato*
4. *Si el fundamento legal de la decisión es el artículo 1746 del CC, cuál es la consideración jurídica y fáctica alegada y acreditada en el*

proceso, para ordenar únicamente a cargo de mi representada “las restituciones mutuas”, como quiera que en forma diáfana esta disposición exige estudiar situaciones tales como el caso fortuito, la posesión de buena o mala fe de las dos partes.

5. Ahora, si el soporte normativo de la decisión es el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, explicar qué supuesto fáctico se demostró en el proceso, por cuanto en forma aclara y sin lugar a interpretaciones distintas, este artículo dispone que el evento de que cualquier persona jurídica hubiera realizado actos atentatorios contra el libre derecho de elección del afiliado, se haría acreedor a una multa ADMINISTRATIVA, impuesta por el Ministerio de Trabajo, y si bien, menciona que quedará sin efecto la afiliación, no es en los términos del artículo 1746 del C.C.

6. Cuál es el presupuesto legal para confirmar la condena de ordenar la devolución de los gastos de administración, como quiera que, en forma expresa el artículo 113, literal b) de la Ley 100 de 1993, en forma expresa indica que, en caso de traslado del RAI al RPM, se transfiere el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos financiero, máxime cuando conforme el artículo 20 de la citada norma enseña que, en los dos regímenes, una parte del aporte pensional, se destina a los gastos de administración, porque claramente como producto de la gestión realizada por mi representada, el capital del afiliado depositado en su cuenta individual generó rendimientos – que se deben trasladar- y además, porque NO financian la pensión y ordenar su pago, genera un enriquecimiento ilícito a favor de Colpensiones, por una actividad que no realizó.

6. Cuál es la consideración jurídica, para “modificar” la sentencia, cuando en realidad se ADICIONÓ, si COLPENSIONES, no accionó en este proceso para lograr el pago de ninguna suma, tales como “cuentas de rezago y cuentas de no vinculados, primas de seguros previsionales, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima”, ni menos la primera instancia la condenó a reconocer valor alguno a favor de la demandante, lo que descarta de una parte, la posibilidad de ejercer las facultades ultra y extra petita, ya que según el artículo 50 del CPT y SS, es una competencia exclusiva de los jueces de primer grado, y por otra, tampoco podría corresponder al grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 69 del CPT y SS, como quiera que la norma condiciona, a que la sentencia sea ADVERSA a la entidad descentralizada, situación que tampoco se evidencia, ya que entre otros argumentos, mucho se ha insistido por la jurisdicción en la especialidad laboral, que estas condenas no desfinancian el sistema pensional, lo que dicho sea, contraviene la realidad advertida por la Corte Constitucional desde la sentencia C-1024 de 2004, en cuanto a permitir el traslado de personas que no han contribuido con el fondo común, como es en este asunto.

7. Cuál es el supuesto legal, para indicar que no opera la prescripción sobre los gastos de administración, primas de seguros y cualquier otra suma diferente al capital y los rendimientos, toda vez que, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, indica que del monto de

*cotización tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual, se destina el 3% para financiar los gastos de administración, lo que supone que no están destinados a incrementar el monto pensional. Al respecto, conviene recordar que, la providencia SL1688-2019 del 08 de mayo de 2019, enseña que, no prescriben los hechos o estados jurídicos. “pero sí los derechos y obligaciones que dimanen de esta declaración”.*

De conformidad con el artículo 287 del C.G.P, la adición de sentencias procede:

***“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.***

***Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.”***

Por otro lado, en virtud del principio de consonancia -artículo 66A CPTSS-, el Tribunal, en el proceso de la referencia, se limitó a examinar las materias concretas que fueron objeto de ataque en sede de apelación, en este caso lo sustentado en el recurso de alzada por el apoderado de PORVENIR S.A., así como abordó el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES por las consecuentes condenas y obligaciones impuestas.

Conforme lo expuesto, resulta improcedente la adición solicitada, pues basta una remisión al fallo proferido para desprender con total claridad que los puntos de apelación planteados fueron desarrollados y atendidos a plenitud, aunque de manera desfavorable a PORVENIR S.A., pues se declaró la ineficacia del traslado que el señor ALBERTO ANTONIO ARRAZOLA MERLANO, realizó desde COLPENSIONES al Régimen de Ahorro Individual, administrado por la AFP PORVENIR S.A, ordenándole a dicha entidad, devolver a Colpensiones todos los valores integrales que hubieren recibido con motivo de la afiliación del demandante, como cotizaciones, bonos pensionales, rendimientos financieros, saldo de cuentas de rezago y

cuentas de no vinculados historia laboral actualizada y sin inconsistencias de semanas, y los aportes voluntarios si los hubiese que se entregarán al demandante, si fuere el caso. También se ordenó a PORVENIR S.A. devolver los gastos de administración previstos en el artículo 13, literal q) y artículo 20 de la Ley 100 de 1993 por el periodo en que administró las cotizaciones del demandante, todo tipo de comisiones, las primas de seguros previsionales, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, a cargo de su propio patrimonio, con los rendimientos que hubieran producido de no haberse generado el traslado. Es decir, no hubo punto materia de estudio que dejara de abordarse, y dentro de ellas, además, cabe el profuso cuestionario que hoy se plantea PORVENIR S.A.

De lo anterior se concluye que la Sala no puede acceder a la petición de adición por no estar dados los presupuestos para que ello opere, razón suficiente para desatender lo solicitado por el apoderado de PORVENIR S.A.

En mérito de lo expuesto la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

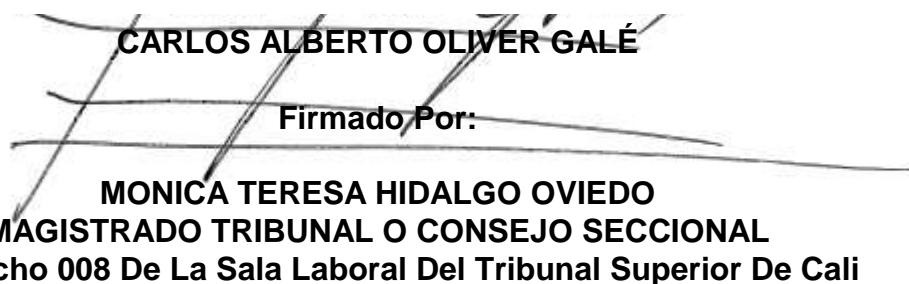
**PRIMERO:** Negar, por improcedentes, la petición de adición de la sentencia numero 197 C-19 del 25 de septiembre de 2020, formuladas por el apoderado judicial de PORVENIR S.A.

**SEGUNDO: NOTIFÍQUESE** por ESTADO electrónico en la página web de la Rama Judicial, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral. Para consultas, ingresar a: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-cali-sala-laboral/100>

**MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO**



**LUIS GABRIEL MORENO LOVERA**



**CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ**  
Firmado Por:  
**MONICA TERESA HIDALGO OVIEDO**  
**MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL**  
**Despacho 008 De La Sala Laboral Del Tribunal Superior De Cali**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:  
**f98a7b439002ef310726fd30193c2afd42571ba2ebc1eec24b13bbe2d496dc  
b5**

Documento generado en 27/11/2020 01:56:57 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**